

margen N° 71 - diciembre 2013

Teorías de la seguridad pública y percepción del delito

Por Dr. Javier Carreón Guillén y Mtro. Cruz García Lirios

Dr. Javier Carreón Guillén. Profesor UNAM, Escuela Nacional de Trabajo Social. México.

Mtro. Cruz García Lirios. Profesor UAEM (Universidad Autónoma del Estado de México). México

Introducción

En el marco de la seguridad pública, conceptos tales como disonancia, elaboración, procesamiento, representaciones, habitus y fiabilidad resultan fundamentales para explicar la influencia de los medios de comunicación sobre la ciudadanía (Innerarity, 2012).

Antes bien, la seguridad pública es una construcción social inherente a la modernidad sólida (Escobar, 2012). En contraste, la percepción de inseguridad es propia de la etapa moderna líquida. La primera modernidad supone una competencia por la legitimidad política, territorial, jurídica, racional, burocrática, productiva y autoritaria (Gervais, 2011). En contraste, una vez que el discurso legitimador fue sustituido por un escepticismo, la modernidad líquida produjo percepciones de riesgo, incertidumbre, azar, e inseguridad (Iglesias, 2010).

Se trata de un contexto en que la ciudadanía aspira a la movilidad que le permita salvar su existencia del peligro que conlleva vivir en un escenario de procesos instantáneos que hacen pensar en lo efímero de la existencia asociada con la delincuencia (Laca, Santana, Ochoa & Mejia, 2011). Empero, el contexto por si solo no sería suficiente para construir la psicosis colectiva de la inseguridad, se requirió de un sistema mediático en el que los hechos fuesen transformados en noticias, programas y reportajes que influirían en las opiniones personales en primera instancia y en la agenda pública en última instancia (Leaf Van Boven & Campbell, 2010).

En tal contexto, el encuadre de los medios de comunicación con respecto a la seguridad incide sobre la construcción de símbolos cuyo impacto en la opinión pública divide a la esfera civil en observatorios ciudadanos y comunidades vulnerables. En el primer caso, el estudio de la seguridad pública derivó en investigación de las percepciones de riesgo en torno a la delincuencia mientras que en el segundo caso, el establecimiento de la agenda se observó en dos efectos: encuadre e intensidad (Maisley, 2013).

Precisamente, en un estudio llevado a cabo durante el último periodo del sexenio de Felipe Calderón, se encontró un sesgo sistemático por parte de los medios impresos de circulación nacional que al ser contrastados con los datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) se apreció una diferencia entre la difusión de prensa y el ICESI en su informe correspondiente a 2010 en el que advirtió un incremento sustancial del delito a transeúnte mientras que los periódicos de circulación nacional difundieron información relativa al incremento de la inseguridad en materia de narcotráfico, trata de blancas u homicidios. Tales cifras contradicen los resultados del observatorio ciudadano ICESI mismo que reportó una disminución en la percepción de la violencia.

Otro hallazgo fundamental fue la prevalencia de las noticias sobre seguridad y violencia en

aquellos diarios de circulación nacional durante el contexto de los comicios del año 2012 en los que se pudo observar una tendencia a la alza en cuanto a delitos del fuero federal más que del fuero común.

En efecto, se trata de dos posturas opuestas en las que se observa el incremento de la percepción de inseguridad y riesgo al momento de llevar a cabo acciones preventivas del delito por parte de la ciudadanía.

Empero, las diferencias sustanciales entre la percepción de riesgo asociada a la influencia de los medios impresos con respecto a la percepción de la inseguridad hace pensar que asistimos a un escenario en el que los métodos y técnicas de investigación parecen sesgar los resultados, sin embargo, es factible comprobar que los medios de comunicación, en este caso los periódicos de circulación nacional, se desmarcan de la opinión ciudadana y parecen construir una agenda diferente ya que los temas que difunden versan más bien sobre la ineficiencia del gobierno de Felipe Calderón en materia de combate a la delincuencia.

A partir de tal contraste es posible cuestionar:

¿Cuáles son los símbolos, significados y sentidos del discurso que las esferas civiles han construido en torno a la inseguridad pública en escenarios de alternancia política y prospectivas electorales que al ser difundidos por los medios de comunicación definirán las políticas de seguridad a través de la inserción de conceptos tales como “narcotráfico”, “plaza”, “sicario”, “lugarteniente”, “cartel” o “ajuste de cuentas” como temas centrales en la agenda pública?

La respuesta a tal cuestión se explicitará desde las teorías psicológicas y sociales de disonancia cognitiva, probabilidad de la elaboración, procesamiento espontáneo, representaciones sociales, habitus urbano, fiabilidad social y legitimidad sociopolítica.

Todas y cada uno de estos marcos teóricos parten del supuesto en torno al cual la seguridad se ha construido como un ente perceptual susceptible de modificarse por la vía del encuadre de los hechos por parte de la prensa. En este sentido, la percepción de riesgo e incertidumbre son procesos centrales en el análisis de la conversión de la seguridad por inseguridad (Orgaz, Molina & Carrasco, 2011). Además, es posible explicar la vulnerabilidad psicológica en la que se encuentran las comunidades e individuos al momento de recibir información sobre delitos tanto del fuero común como del fuero federal que impactan sus estados afectivos y emocionales definiendo sus decisiones y acciones preventivas.

También es posible advertir que otro supuesto que comparten las teorías es aquel relativo a la relación entre Estado y ciudadanía como entidades interdependientes y enlazadas por los medios de comunicación que diversifican los símbolos de inseguridad al mismo tiempo que re-significan los discursos que alrededor de la difusión mediática se han construido como temas de la agenda comunitaria y personal (Osakpa, 2012).

La seguridad pública y la violencia asociada a ella suponen la emergencia de discursos relativos a la adaptación de la ciudadanía al contexto de riesgo e incertidumbre así como la formación de actitudes y representaciones que al ser procesadas reconfiguran el escenario sociopolítico que los medios de comunicación se han encargado de construir para insertar temas alusivos a los comicios y con ello poder influir en las preferencias electorales así como en la contienda política y el debate público sobre las opciones de gobierno y su eficiencia al momento de prevenir el delito o combatir la delincuencia.

Es por ello, que el presente trabajo servirá para explicitar las nuevas relaciones entre los actores involucrados en el escenario de seguridad y violencia. Se trata de las fuerzas coercitivas y

persuasivas del Estado el cual a través de sus instituciones ha buscado legitimar su sistema democrático, político, jurídico y de justicia. Frente a la omnipresencia del Estado, la delincuencia organizada subyace como un segundo actor en el drama de la inseguridad. Asimismo, los medios de comunicación fungen como un tercer actor relacionado directamente con un cuarto a saber: la ciudadanía. Por último, un sector de las esferas civiles, los llamados institutos u observatorios ciudadanos se erigen como actores fundamentales ya que evalúan permanentemente el accionar de las fuerzas coercitivas del Estado y a la clase gobernante (Rodríguez, 2010). Es decir, la ciudadanía, por lo menos una parte mínima de ella, debate el futuro de su relación para con las clases gobernantes y en función de ello construyen discursos sobre los cuales es posible advertir símbolos de zozobra, indignación, inconformidad o desobediencia.

Por ello será fundamental explicar el impacto de la información difundida en los medios de comunicación sobre la formación de opinión pública y evaluación de políticas y programas de prevención del delito o combate al narcotráfico para poder anticipar nuevas relaciones entre las esferas civiles, políticas, empresariales y delictivas.

Tal ejercicio permitirá abrir el debate público sobre los recursos con los que la ciudadanía cuenta al momento de entablar un diálogo con sus autoridades y re-significar la relación del estado para con la delincuencia organizada ya que parecen vislumbrarse dos opciones: por una parte el Estado negocia con la delincuencia espacios de influencia al mismo tiempo que establece zonas neutrales del delito y por otra parte, el Estado recupera la rectoría de la seguridad pública y convierte la percepción ciudadana del delito en relaciones de confianza para con sus autoridades. Este dilema parece fundamental que sea esclarecido ya que de ello dependerá el futuro de la construcción de esferas civiles frente a problemas que les amenazan con su desaparición forzada.

Ahora bien, por otra parte resulta importante profundizar en el análisis de la construcción y establecimiento de la agenda ya no a partir de los efectos de encuadre o intensidad, sino ahora desde la formación de actitudes, representaciones y habitus inferidos de los discursos de los actores involucrados en la trama moderna de la inseguridad.

Para tal propósito, será indispensable construir categorías de análisis que permitan explorar los símbolos y significados de las políticas de seguridad en lo general y la percepción de inseguridad en lo particular. Se trata de un proceso en el que se debe contrastar la información institucional disponible por vía de la rendición de cuentas en materia de prevención del delito y combate a la delincuencia para contrastarla con los resultados de encuestas y entrevistas a profundidad de representantes o tipos ideales de la esfera civil.

Por último, el cruce de información permitirá no sólo tener un panorama global e imparcial de la situación, sino además también establecerá criterios de discusión y evaluación de políticas de prevención del delito y combate a la delincuencia a nivel federal, estatal y municipal.

Marco teórico

En este apartado se revisan las teorías y conceptos centrales en la discusión de la seguridad pública como estrategia del Estado y sus efectos en la ciudadanía, así como la percepción de inseguridad como una consecuencia del poder mediático en torno a la evaluación de políticas públicas y programas de prevención del delito.

En primera instancia, la Teoría de la Disonancia Cognitiva (CDT por sus siglas en inglés) sostiene que el Estado genera información la cual al ser restringida a la opinión pública genera síntomas de indignación, inconformidad, desconfianza y zozobra. Se trata de información que

contradice las emociones ciudadanas de paz pública y confianza en el sus semejantes. Ante tal dilema, la ciudadanía se organiza para producir información que establezca las creencias en torno a la seguridad ciudadana. Sin embargo, otro sector lleva a cabo acciones de protección individual y grupal que le garanticen su subsistencia y la preservación de sus bienes. En ambos casos, la esfera civil está organizada y tiene los recursos para entablar un diálogo con sus autoridades para la protección de sus patrimonios. Es decir, la disonancia cognitiva que generó la información relativa a la delincuencia organizada, es socavada por los sectores sociales organizados para llevar a cabo sus actividades cotidianas sin menoscabo de su seguridad.

No obstante, otro sector vulnerable, marginado y/o excluido de la ciudadanía desarrolla patologías de psicosis, histeria y paranoia colectiva que les hacen proclives a los mensajes de los medios de comunicación mientras aluden al incremento e intensidad de la violencia. En este sentido, la disonancia cognitiva es el resultado de la confrontación de información relativa a cifras y experiencias de latrocinio, secuestros, impunidad, corrupción, opacidad, homicidios o extorsiones. En efecto, la DCT explica el proceso general de la información y sus efectos en la percepción individual de las decisiones y acciones.

Sin embargo, la DCT sólo explica el efecto, pero no el procesamiento de información que lleva a una persona a convertir los datos de seguridad pública en percepciones de inseguridad personal o grupal. En este caso la Teoría de la Probabilidad de la Elaboración (LET por sus siglas en inglés) se especializa en explicitar el proceso interno en el individuo que explica sus intenciones de llevar a cabo una acción preventiva ante una problemática global o específica.

La LET plantea que la información es procesada en dos modos por parte de los individuos. En primer lugar, la información se desplaza por una ruta periférica en la que la necesidad de obtener información sobre un acontecimiento personal o colectivo importante lleva a los sujetos a procesar afectivamente la información y como resultado se genera una actitud intermitente e inexorable a una acción consistente. O bien, la información tiene un impacto tal en el individuo que genera una serie de representaciones e interpretaciones que lo llevan a aceptar o rechazar el contenido de la información circundante. En ambos casos, la información es procesada internamente por el individuo sin referencia a otro semejante o a un contraste de opiniones ni mucho menos a un debate, empero es una aproximación que esclarece las decisiones de apoyo a políticas de combate frontal a la delincuencia o bien, la prevención del delito a partir de programas de despistolización.

No obstante, la ELT se especializa en explicar los procesos centrales más que los periféricos, en ese contexto, la Teoría del Procesamiento Espontáneo (SPT por sus siglas en inglés) asume la hipótesis en torno a la cual los individuos responden y procesan afectivamente la información para convertirla en heurísticos (atajos mentales) ante circunstancias diversas. La SPT predice el advenimiento de una acción luego de que la información a sido diseminada en actitudes que por su grado de emotividad corresponden con comportamientos imprevistos.

En el caso de la percepción de inseguridad, el procesamiento espontáneo activa experiencias relativas a la comisión de un delito que influirán en actos preventivos, pero generarán representaciones sociales más que sólo símbolos colectivos compartidos. Precisamente, la Teoría de las Representaciones Sociales (RST por sus siglas en inglés) vendrá a esclarecer tal proceso en el que los individuos configuran dos dimensiones de la información circundante: se trata de un núcleo central que aglutina a aquellos elementos significativos en donde se desarrolla identidad, confianza, arraigo y habitus en referencia a instancias periféricas en donde se gestan los cambios simbólicos que dinamizan la interrelación entre personas y grupos llevándolos al conflicto y cambio social.

De este modo, la RST plantea que la formación de actitudes, sean afectivas o cognitivas al

interior de los individuos es el resultado de las relaciones que este lleva a cabo para con los grupos a los que pertenece o quiere pertenecer. Empero, tal proceso se desarrolla a través del debate en los medios de comunicación y en tanto tal su diseminación en la opinión pública es el resultado de un proceso de representaciones sociales que materializan los conceptos abstractos esgrimidos en Internet, televisión, radio, cine y prensa. En tal sentido, cuando tales representaciones sociales son vinculadas a espacios, zonas y comunidades de interrelación simbólica, se gestan habitus que al ser transferidos de generación en generación garantizan la permanencia del núcleo central.

Sin embargo, las representaciones sociales también emergen de temas difundidos por los medios de comunicación y es por ello que la Teoría del Habitus Urbano (UHT por sus siglas en inglés) alude a una serie de supuestos en los que la herencia y el aprendizaje se compaginan para explicar la complejidad de la vida cotidiana. Según la UHT, la información es insuficiente para conformar una identidad que diferencia a un grupo de otro. De este modo, quienes habitan zonas urbanas son más proclives a los cambios que quienes conviven en zonas periurbanas. Esto es así porque las normas y valores heredados en la periferia inciden más que entre quienes habitan las urbes. Tales procesos marcan la pauta de una mayor fiabilidad social en comunidades vulnerables, marginadas o excluidas que en grupos disidentes urbanos.

La Teoría de la Fiabilidad Social (SFT por sus siglas en inglés) asume que la confianza en las autoridades se gesta desde las comunidades y los grupos más que desde las políticas públicas, programas sociales, opinión pública u observatorios ciudadanos. La fiabilidad social es un proceso afectivo en el que individuos depositan su confianza en quienes los representan y toman decisiones públicas por ellos. Se trata de un habitus comunitario y periurbano que diferencia a las localidades de las percepciones de riesgo que se desarrollaron en las urbes. La SFT plantea que los individuos delegan responsabilidades a sus representantes no sólo porque los consideran legítimos, o porque los visualicen como líderes, sino porque siguen tradiciones ancestrales que los llevan a confiar desinteresadamente en quienes gestionan por ellos las demandas de las comunidades.

En contraste, cuando las autoridades son percibidas como legítimas, la fiabilidad social se preserva, aunque se orienta más a los demás integrantes de la comunidad y en menor medida a las autoridades que son visualizadas como externas a los usos y costumbres locales.

En síntesis, las teorías y conceptos esgrimidos permiten explicar el proceso de conversión que va de la información relativa a la rectoría del Estado en materia de seguridad pública hasta la emergencia ciudadana en esferas u observatorios que perciben inseguridad y generan información sobre los casos por resolver. Antes bien, los medios de comunicación juegan un papel clave en tal relación ya que difunden información sesgada que inclina la balanza hacia uno u otro lado y por ende definen la agenda y los temas de discusión pública, aunque se alejen de una noción de paz pública y se aproximen a escenario de desesperanza alimentada por noticias acerca de la corrupción, impunidad, opacidad o violencia.

Teoría de la disonancia cognitiva

La Teoría de la Disonancia Cognitiva (DCT) fue empleada para explicar los dilemas de decisión, elección y acción alusivos a información no necesariamente convergente con nuestras opiniones (Albacerrín & Wyer, 2011). La DCT es heredera de tres paradigmas; cambio libre, proceso inducido y justificación forzada. En el albor de sus 55 años, la DCT ha enfocado su desarrollo en el cambio y reducción de la actitud a partir del cambio libre. La DCT plantea discrepancias entre los esquemas cognitivos y la información generada por dicha discrepancia. Un mensaje que es consonante con las expectativas generará respuestas consistentes.

Respecto a la percepción de inseguridad, la disonancia cognitiva es un proceso mental que busca restaurar el orden cognitivo que se desdibujó luego de que los medios de comunicación difundieran noticias en torno a delitos del fuero común o federal que impactaron a las audiencias de un modo tal que se formaron actitudes, se construyeron representaciones y se establecieron hábitos discursivos en torno a los cuales el Estado es el responsable directo por su opacidad en el combate a la delincuencia ya que no supo prevenir las causas socioculturales que permitieron el surgimiento de grupos delictivos y su expansión más allá de las fronteras (Araujo, 2012).

La disonancia cognitiva es un concepto que vincula la información general sobre la seguridad pública con los canales de difusión del delito y en tanto apología, explica su impacto en las audiencias vía la formación de actitudes, construcción de representaciones y establecimiento de identidades (Badejo & Oluyemi, 2012). La disonancia cognitiva sintetiza los procesos en los que la información sesgada de los medios impresos afecta a la opinión pública ya que la someten a una serie de discrepancias desde la que habrá de tomar decisiones orientadas al cambio.

En síntesis, la disonancia cognitiva es un concepto que inhibe la proliferación del crimen organizado ya que un sector de la población manifiesta tener actitudes desfavorables hacia sus autoridades, pero favorables a sicarios, lugartenientes, narcotraficantes o capos (Albacerrín, Wallace & Hart, 2012). Se trata de actitudes bivalentes que por su grado de intensidad transforman las decisiones y acciones individuales en preferencias discursivas relativas a la apología del delito.

Teoría de la probabilidad de la elaboración

El procesamiento cognitivo de la información es explicada por la TPE en la que las imágenes son relacionadas con emociones y los datos con razonamientos. La TPE explica los procesos de actitud hacia objetos que por su naturaleza discrepante propician una elaboración que puede ser emocional o racional, pero que cada individuo asume como un símbolo que ubicaría en la periferia de su cognición y al cabo de un proceso deliberativo sistemático adoptará como un argumento central de sus decisiones y acciones (Belli, 2010). La TPE analiza objetos actitudinales controversiales en los que la posición del receptor será orientada a partir de su aceptación o rechazo elaborado de información proveniente de una fuente que por su grado de especialización y confiabilidad propiciará la necesidad de cognición. La TPE sostiene que las imágenes serán sujetas de escrutinio cuando su fuente de emisión es desconocida y poco confiable.

Puesto las emociones sólo activan un proceso periférico en el que la representación está anclada a un núcleo de significación. Al ser un proceso periférico de imágenes, las emociones cambian constantemente. Su intermitencia es causada por símbolos y significados dispersos los cuales varían en función de las situaciones (Bizer, Larsen & Petty, 2010).

En el caso de la seguridad pública y la percepción de inseguridad, la probabilidad de elaboración supone que los procesos internos son el resultado de estrategias informativas y comunicativas que buscan persuadir a las audiencias mientras las disuaden de sus grupos de referencia para adoptar estilos de vida de grupos delictivos que sustituyan a su vida cotidiana (Bolívar, Contreras, Jiménez & Chaux, 2010). Es aquí donde el poder cobra una especial relevancia ya que se trata de ejemplos a seguir por parte de un sector de la sociedad.

En síntesis, la probabilidad de la elaboración se gesta desde una serie de libertades y oportunidades que un sector de la esfera civil interpreta como recompensa por la situación paupérrima en la que se encuentra. No obstante, si la información es lo suficientemente impactante, entonces se desarrollan una serie de respuestas que por su grado de deliberación hacen posible

anticipar comportamientos derivados de una situación discrepante, o bien, se desprenden emociones que inhiben todo razonamiento y más bien conservan la ruta original de procesamiento de información y por ende la permanencia del efecto del mensaje en las decisiones personales (Brodie, Beck & Carr, 2011). En tal sentido, se trata de una dimensión afectiva que va más allá de cualquier estructura cognitiva, pero que sirve como respuesta ante situaciones inciertas y eventos impredecibles como los de seguridad pública percibidos como escenarios o procesos de inseguridad.

Teoría del procesamiento espontáneo

Sostiene que el comportamiento humano es el resultado de una activación emocional guardada en la memoria y vinculada con el futuro accionar de las personas.

A partir de un estímulo informativo, los individuos adoptan símbolos que al resguardarlos activarán comportamientos futuros en situaciones poco estructuradas, pero con objetivos debidamente significativos (Baker, 2011). Es así como la actitud improvisada tendría dimensiones indicadas por asociaciones entre consumos y evaluaciones. Puesto que el procesamiento espontáneo supone la convergencia evaluación–acción es pertinente incluir reactivos en los que se incluyen creencias y evaluaciones hacia el objeto actitudinal. El enfoque actitudinal de su improvisación se sustenta en las creencias puesto que las determinan.

Sostiene que la causa principal de un accionar poco definido y más bien improvisado en la significación de la experiencia previa con el objeto actitudinal. La predicción del comportamiento, no habría que buscarlo en la recepción de información, sino en su simbolización, significado y sentido (Ruíz, 2010).

La Teoría del Procesamiento Espontáneo plantea a las actitudes como consecuencia de la activación de experiencias con el objeto actitudinal. Las actitudes son asociaciones entre evaluaciones de objetos. Una evaluación negativa incrementa la disposición y con ello la espontaneidad del comportamiento.

Teoría de las representaciones sociales

Una representación social por sí sola sería un conjunto de variables afectivas, emocionales, cognitivas y conductuales orientadas a una construcción grupal. Sin embargo, las representaciones sociales son más bien un contexto histórico en el que convergen una diversidad de símbolos, significados y sentidos orientados a la formación, desarrollo o extinción de un grupo en relación con alguna problemática que les atañe. Se trata de saberes y conocimientos cotidianos que derivan en discursos, creencias y estereotipos inherentes a algún grupo, o bien, son categorizaciones prototípicas influidas por identidades mayoritarias y minoritarias (Dammert, Salazar, Montt & González, 2010). De un modo u otro, son estructuras interpretativas de la realidad y para ello, se presentan en estilos comunicativos y semióticos de interpretación de la realidad. Una vez transformadas en discursos, las representaciones sociales devienen en un pensamiento social delimitado por un objeto, grupo, sociedad o cultura, aunque también pueden ser conocimientos sociales acerca de la ambigüedad y difusión informativa. Es posible observar que esta vertiente holista de las representaciones sociales considera niveles discursivos en los que una esfera social influye a otra con menos recursos simbólicos y mayor afectividad.

Por su parte la vertiente estructural de las representaciones sociales considera que la diversidad

de la vida cotidiana es procesada racionalmente para dar un sentido de orden a la misma y delimitar las acciones personales frente a las construcciones colectivas. Incluso, las representaciones sociales son opuestas, según tal enfoque, al conocimiento científico, aunque de él puedan haber derivado (Sampedro & Resina, 2010). Se trata de información procesada en símbolos que permitan ajustar comportamientos individuales en estilos de comunicación colectiva. Tal proceso involucra a los grupos en tanto existan elementos de comunicación.

No obstante, la construcción de símbolos para la comunicación y la acción práctica derivan de los medios de comunicación, además de ser observables mediante el lenguaje, los grupos construyen discursos que los diferencian de otras audiencias. En este sentido, los valores son indicadores de la representación social de un objeto mediático y su devenir en símbolos (Marina, 2010). Ello supone la incidencia de normas grupales sobre valores, creencias y opiniones que se difunden en los medios de comunicación (Borjas, 2011). Es decir, la influencia de los medios implica la interpretación de sus contenidos por parte de audiencias en referencia a otros contextos como el entorno, la familia o la escuela (Maric, 2012).

Una tercer vertiente asegura que las representaciones sociales son sistemas organizadores de la realidad sin importar la fuente de información o su procesamiento, estructuran y orden la realidad (Álvarez, Núñez, Álvarez, Dobarro, Rodríguez & González, 2011). Tal proceso indica una relación dual entre individuos e información ya que no sólo se reproducen contenidos una procesados los símbolos, sino además se produce información haciendo más compleja la relación (Fernández, Revilla & Domínguez, 2010). En otras palabras, dotan de sentido a la realidad personal, interindividual y grupal (Velázquez, Gutiérrez & Quijano, 2013). Ello sugiere que las representaciones sociales se sintetizan en constructos o invenciones de la realidad frente a la cual las personas asumen una postura innovadora ya que no sólo permiten su influencia, sino que al interpretar la información la diversifican aún más (Barrios, 2013). Si además agregamos el proceso comunicativo y discursivo, entonces tenemos que las representaciones sociales son símbolos prácticos para intervenir en la vida cotidiana (Barriga, Correa & Figueroa, 2013).

En síntesis, la vertiente holista, estructuralista y sistémica de las representaciones sociales coinciden en que éstas son externas al individuo, aunque la información se procese internamente. Además, señalan que ello permite un vínculo entre los grupos y las personas de un modo tal que la realidad es procesada deductiva o inductivamente, pero definitivamente es un medio de interrelación humana.

Teoría del habitus urbano

Las Teorías de los Campos, Capitales y Habitus sugiere la combinación de tres procesos históricos en los que se objetivan sistemas de disposiciones mientras se internalizan estructuras sociales y se construyen los recursos con los que cuentan los individuos al momento de establecerse desigualdades que orientaran sus decisiones y estrategias de cambio.

De este modo, un campo es la externalización de los estilos de vida y se contrapone a la internalización del sentido común que supone un habitus (Capdevielle, 2011) y que a su vez da sentido social a la idea de capital (Fortich y Moreno, 2012). Es decir, sin los habitus, el capital sería un proceso emergente e inexorable a las relaciones de poder así como a los símbolos de libertad o desigualdad (García, 2011). Empero, la socialización que supone el habitus es aquella en la que las estructuras pueden ser internalizadas sin mediaciones y que su conexión con el campo es directa sin intermediarios así como su conformación en capital sería directa y sin barreras o atajos que los modifique (Martínez, 2013). La relación campo y habitus para conformar un capital parece

depender de la socialización en la que los tres procesos se establecieron como ejes de estructuración del sujeto y objetivación de sus desigualdades ((Joignant, 2012). En este sentido, el concepto de habitus deriva de una cultura o nación estables a partir de sus estructuras y sistemas que se transfirieron de generación en generación (Baker, 2008). Por ello, es un sistema de estructuras que inciden en las sensaciones, intenciones y acciones que determinan la confianza y la solidaridad entre individuos (Castro, 2011).

Los conceptos de campo, habitus y capital se relacionan con estructuras y sistemas de representación como de acción, aunque por ser intangibles, pueden inferirse a partir de observaciones sistemáticas. Si tales comportamientos pueden ser registrados, entonces será posible asignar un código a cada observación de acciones que permita discernir un termino integrador de las tres dimensiones para explicar la práctica profesional; mediación, peritaje y gestión relativos al trabajo social. De este modo, la dinámica del habitus contrastaría con el campo estático en el que el capital se origina y desarrolla. Un sistema de disposiciones abierto al cambio supone una estructura estable en la que las representaciones y acciones son reguladas en su proceso de influencia que los orienta al cambio, aunque entre campo y habitus puede existir un conflicto que genere capitales para estabilizar a las estructuras de creencias o de valores mientras dinamiza las representaciones y comportamientos alusivos a la formación profesional del trabajo social (Robles y Leso, 2012). Debido a que tanto la formación como la práctica son campos en los que la historia del trabajo social se convierte en un objeto, el habitus funge como un cuerpo de historia de poder entre quienes establecen los programas de intervención y quienes llevan a cabo las estrategias para llevar a buen puerto los lineamientos de la política social. Mientras tanto en la academia la formación profesional se orienta a la conceptualización más que a la discusión, los problemas inherentes a las relaciones económicas de América latina, son visualizados como efectos del proceso histórico social (Basta, Cavalleri, Fink, López, Maiola, Stancanelli y Vdovsov, 2012).

Las Teorías de los Campos, Capitales y Habitus explican el proceso histórico mediante el cual el espíritu laboral del Trabajo Social se ha orientado más a la actividad asistencial que al emprendimiento. Si la práctica profesional se desarrolla en un campo de poder, entonces los recursos discursivos develan las disposiciones históricas relativas al trabajo social encaminadas al asistencialismo más que a la crítica o a la innovación. Es decir, los profesionales del asistencialismo son portadores de campos de poder institucionales plasmados en las políticas sociales y los programas de atención a sectores relacionados con la conformidad y la dependencia. Una consecuencia del campo de poder asistencialista puede ser observada en la formación del capital humano el cual estaría indicado por un espíritu asistencialista más que por un espíritu emprendedor. Tal diferencia estriba en que el primero se relacionaría con las políticas clientelares y el segundo con las políticas de fomento empresarial y superación de la pobreza. Empero, las libertades, oportunidades, capacidades y responsabilidades que suponen ambos sistemas y estructuras de poder indicarían diferencias imperceptibles en ambos, sólo pueden ser diferenciados si se consideran sus bases históricas. El Trabajo Social, en ese sentido histórico, estaría permeado de discursos y estrategias de poder que conservan las estructuras asistencialistas en detrimento de la creatividad y la innovación así como el cambio social. Los campos, capitales y los habitus inherentes al Trabajo Social están circunscritos a sistemas y estructuras de conformidad y obediencia al mismo tiempo que socavan el conflicto, la innovación y el cambio social. En otras palabras, las libertades son restringidas para otorgar un mínimo de oportunidades, aunque las capacidades se intensifiquen por dicha escasez, se orientan a la competencia más que a la cooperación, a la desconfianza más que a la confianza impactando con ello la disponibilidad de los recursos y las disposiciones para crear valor en torno a un grupo, sus discursos y acciones.

Teoría de la fiabilidad social

En principio, la ciudad compacta supone la emergencia de sistemas de distribución que aseguren la calidad de vida de sus habitantes, empero la urbe difusa está construida a partir de la imaginación de sus residentes. Mientras que en la urbe compacta la esfera civil está vinculada con la esfera política, en la ciudad difusa la opinión pública está lejana a lo que sus autoridades estiman conveniente para la demarcación. En tal contexto, la confianza emerge como una moneda de cambio en la urbe compacta mientras que la fiabilidad subyace en la ciudad difusa.

En el ámbito político, la ciudad compacta es heredera de las ciudades antiguas que velaban por la seguridad social, pero contrasta con éstas en cuanto a su infraestructura la cual le permitiría subsistir por periodos continuos de tiempo. Aunque la confianza a las autoridades es esencial en la urbe compacta, en realidad es la desconfianza a lo extraño lo que incentiva la corresponsabilidad entre ciudadanos y autoridades ya que la protección a los bienes privados más que a los públicos es materia de buen gobierno y civilidad en la urbe compacta.

Por el contrario, en la ciudad difusa los bienes son privados, pero en función de tradiciones, usos y costumbres colectivas para beneplácito del Estado porque se ha encargado de desmembrar al sistema policiaco y lo ha confinado a resguardar los bienes públicos. Por ello, en el sistema difuso la fiabilidad emerge como un mecanismo de defensa ante la impunidad, opacidad, corrupción e ingobernabilidad que caracteriza a las zonas difusas.

La fiabilidad es el resultado de la interrelación entre la ciudad difusa y la urbe compacta, aunque se ha relacionado con las zonas periurbanas que ni son compactas ni son difusas, sino más bien confusas (Trujano, 2011). A diferencia de la confianza que emerge de la certidumbre y la seguridad, la fiabilidad es un estado de indefensión en el que la sociedad civil está a expensas de las voluntades políticas. Es decir, la ciudad difusa parece conminar a sus residentes a emigrar a la urbe compacta antes de que ésta, la ciudad difusa, devenga en una zona de confort o conflicto que impida a la sociedad desarrollarse sostenidamente.

Antes bien, la fiabilidad es condición significativa de la participación ya que es en esta donde se orienta la movilización ciudadana por la redistribución de los recursos. Es aquí donde los sistemas tarifarios aparecen como instrumentos de gestión ya no para conservar los recursos, sino para influir en las preferencias electorales.

En un principio los mecanismos de participación ciudadana filtraban las propuestas desde organizaciones políticas más que desde organizaciones civiles (Fabricant & Postero, 2013). Fue en el devenir de los derechos humanos de tercera generación donde la sociedad civil obtuvo su carta de naturalización ante las problemáticas que aquejaban a los usuarios de los servicios públicos. Empero, los derechos humanos son símbolos de resguardo de las libertades y oportunidades, pero las capacidades de organización civil distan de sus libertades ya que ésta ha demostrado que aunque su organización sea improvisada rebasa las expectativas de quienes la miran con desdén.

El pleno ejercicio de los derechos civiles supone el establecimiento de una agenda común que como ya se ha visto deviene de la información circundante en los medios de comunicación, pero la estructura urbana en donde se procesan la reorientan a una participación civil frente a las restricciones jurídicas o gubernamentales.

No obstante que la participación quiere ocupar los espacios que el Estado ha dejado al mercado, ésta ha sido absorbida por ambos para legitimar la privatización de los servicios públicos.

Si la ciudadanía busca mediante la participación contrarrestar el efecto privatizador del Estado para beneficio del mercado, entonces la sociedad civil se ve obligada a excluir sectores importantes

de ella para entablar un diálogo con la clase política en materia de abastecimiento de servicios públicos a costa de marginar la parte difusa de la ciudad (Castillo, Esparza, Argueta, Márquez y Velázquez, 2010).

Es así como la participación es una consecuencia de la opacidad del Estado frente al desmantelamiento del bienestar económico, social y comunitario. A medida que las instituciones públicas se transforman en sociedades anónimas o asociaciones civiles, los recursos naturales y los servicios públicos adquieren una nueva desigualdad que estriba en su administración y por la cual se espera que las capacidades de gestión determinen el desarrollo local, humano y sustentable (Escobar, 2012). De este modo, la gobernanza de los recursos naturales, energéticos e hídricos depende de la capacidad organizativa y distributiva de asociaciones civiles o sociedades anónimas.

La gobernanza sugiere que las esferas pública y privada se fusionen, que las esferas civiles, políticas y económicas converjan en acuerdos que les permitan distender la relación entre periferias difusas y centros compactos, entre los fundamentos comunitarios y los principios liberales.

Liberalismo y comunitarismo entienden a las ciudades como espacios de gestión ya sea de tradiciones o de libertades. En este sentido, el establecimiento de tarifas está claramente diferenciado en dos rubros: subsidios y sanciones.

En el primer caso, la gobernanza de los recursos se gesta desde el establecimiento de subsidios para reducir costos que permitan, según reza la lógica liberal, el otorgamiento de oportunidades en redes de distribución y consumo. Por el contrario, cuando los recursos naturales son considerados como parte de la vida cotidiana y representan algo más que productos y servicios de consumo, las redes de distribución se complejizan a nivel local, regional o global. Es decir, mientras que las organizaciones multinacionales y transnacionales quieren penetrar en las tradiciones locales y para ello buscan alianzas con pequeñas y medianas empresas, las comunidades diversifican sus significados relativos a quienes los gobiernan y quienes pretenden disuadirlos de sus costumbres para adoptar estilos de vida globales (Iglesias, 2010).

Empero, la gobernanza en tanto redes de gestión está supeditada a organismos financieros multinacionales que determinan no sólo las políticas de desarrollo, sino la participación ciudadana e incluso las alianzas entre transnacionales y pymes (Orgaz, Molina y Carrasco, 2011).

Una consecuencia directa del impacto de las políticas monetarias sobre la sociedad civil es una especie de fiabilidad de gobernanza indicada por la brecha entre la misma esfera civil. Se trata de organizaciones ciudadanas versus consumidores en donde las primeras, a través de observatorios, vigilan la tendencia del consumo y denuncian la precariedad en la que cada vez más se encuentran los individuos dispersos de la organización civil (Nin, 2012). En tal sentido, la gobernanza fue una respuesta del Estado frente a la desregulación de los servicios públicos, aunque la estrategia debió ajustarse a las realidades de gestión territorial que significaron su privatización. A medida que las sociedades adoptaron estilos de vida frugales el territorio se transformó en zonas difusas no sólo desreguladas, sino re-posicionadas por la migración. Fue así como el rediseño de políticas urbanas centró la problemática en los asentamientos humanos irregulares. La solución consistió en el reordenamiento territorial a través de instrumentos que traspasaran los límites municipales, organizaciones locales o comunidades gestoras (Rosas, Calderón y Campos, 2012).

Más allá del establecimiento de una agenda común de los servicios públicos o la gestión de un sistema tarifario, la gobernanza de los recursos naturales supone instrumentos de desarrollo local que inevitablemente conlleva la privatización de los servicios. Es decir, las libertades, oportunidades, capacidades y responsabilidades que se construyen en redes de gestión están supeditadas al financiamiento de organismos internacionales o empresas transnacionales capaces de

absorber los montos de inversión, contratación de deuda, gasto en cuenta corriente o infraestructura sin la cual los esfuerzos locales se reducirían a conflictos. En tal coyuntura, la participación social, política y ciudadana acordes con las políticas públicas son el contrapeso a la discrecionalidad de las autoridades locales, haciendo parecer que es posible un sistema de gestión civil independiente de la acción gubernamental, pero a expensas de las capacidades que el mercado demanda para con usuarios de los servicios públicos quienes son reducidos a meros consumidores de facto (Díaz, 2013). Es cierto que la sociedad civil e incluso trasnacionales, pymes y autoridades pueden configurar un sistema de gobierno en red, pero el monto de financiamiento requerido para la construcción de infraestructura rebasa las capacidades financieras, aunque sea en los bancos donde se determinen los préstamos, la sociedad civil que acceda a tales créditos verá comprometido su futuro ya que gastará sus posibilidades futuras.

Discusión

En referencia a los estudios llevados a cabo por García (2011; 2012; 2013) en demarcaciones periurbanas donde encontró un efecto indirecto de la difusión informativa en los medios de comunicación sobre la opinión ciudadana local, el presente trabajo ha establecido ocho relaciones reflejantes de la legitimidad sociopolítica relativa a la percepción de inseguridad.

Empero, la presente investigación ha propuesto ocho dimensiones de análisis para explicar la multidimensionalidad de la percepción de inseguridad y su diseminación en la ciudadanía como proceso psicológico y sociológico.

Respecto a la propuesta de Giddens (2011) en las que la fiabilidad social es asumida como el efecto de las relaciones individualistas con respecto a la relación entre autoridades y ciudadanía, el presente estudio ha corroborado el supuesto según el cual la percepción de inseguridad difundida en los medios de comunicación incide en la evaluación de política y programas de prevención del delito y combate a la delincuencia, es decir, la confianza depositada en las autoridades legitima las decisiones y acciones, aún a pesar de que los resultados expuestos en la prensa contradigan la percepción de seguridad pública.

Del mismo modo, los estudios llevados a cabo por Bourdieu (2011) en los que el habitus está diversificado por los discursos, el presente trabajo ha señalado que es un factor indicativo de legitimidad, pero está permeado por otros factores de orden psicológico más que sociológico. En este sentido, el discurso de la inseguridad es el resultado de la interrelación entre los actores gubernamental y civil siendo predominantemente un habitus adquirido más que heredado. En torno a los trabajos en los que las representaciones sociales de la seguridad pública están configuradas por una centralidad (paz pública) y otra periférica (rectoría del Estado), el presente estudio ha establecido a las representaciones sociales periféricas como síntomas de legitimidad sociopolítica en materia de seguridad pública, aunque ello implica que la paz pública no sea un tema central en las representaciones locales.

Con respecto a las investigaciones de Fazio (2011) en donde las actitudes hacia actores políticos se forman a partir de campañas mediáticas con énfasis en la imagen pública más que en la gestión de los servicios públicos y la acción gubernamental, el presente trabajo ha establecido que la formación de actitudes tiene un origen sociopolítico en el que son el resultado de instrumentos de gestión. Ello resulta fundamental ya que a menudo se consideran a las actitudes como categorías o evaluaciones de objetos o personas, empero en la presente investigación son el resultado de la difusión de los medios de comunicación en torno a la rectoría del Estado frente a la ola de violencia y la escalada delictiva.

En el caso de los trabajos de Ajzen (1991; 2001; 2002) en los que las creencias fueron determinantes de actitudes, decisiones y acciones, el presente estudio ha incorporado a las creencias en torno a información mediática de la inseguridad como indicador de la legitimidad sociopolítica de la rectoría del Estado. En este sentido, las creencias ya no sólo explican acciones civiles, sino la legitimidad de tales acciones ante la ineficiencia de las autoridades locales y la diseminación de la paz pública. Esto es así porque los medios de comunicación difunden información relativa a violencia, pero son las audiencias las que construyen las creencias desfavorables o favorables a la rectoría del Estado en materia de seguridad pública. En los trabajos de las capacidades son un instrumento de gestión del conocimiento que motiva la obtención de objetivos y a partir de ahí genera un clima de competencia que beneficia al individuo y a los grupos en los que está inserto. En el presente trabajo se ha modelado a las capacidades como otro síntoma de legitimidad sociopolítica en cuanto a la paz pública como resultado de las habilidades sociales ciudadanas.

En el planteamiento de Sen (2011) las oportunidades son un factor clave para el desarrollo de habilidades y responsabilidades que permitan a una comunidad el crecimiento y la prosperidad no sólo económica, sino además social. En el presente trabajo, las oportunidades son un síntoma de la legitimidad sociopolítica porque la situación económica no permite cabida a formas alternativas de desarrollo que no se generen desde el Estado. Si además agregamos que los medios de comunicación exacerban la percepción de oportunidades económicas y laborales, entonces asistimos a un escenario en el que la rectoría del Estado supone el resguardo y la diseminación de los recursos públicos para la generación de oportunidades. Siguiendo las propuestas de las libertades de elección suponen decisiones compartidas y corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos, el presente trabajo ha demostrado que son las gestiones del gobierno local las que repercuten en la percepción de libertades de elección en la comunidad. En este sentido, la corresponsabilidad se erige como un elemento central no sólo para la seguridad pública, sino también para la construcción de la paz pública y la regeneración del tejido social.

Conclusión

Los hallazgos discutidos muestran que la legitimidad sociopolítica de la rectoría del Estado frente a la escalada de violencia está indicada por ocho factores de orden psicológico y sociológico los cuales pretenden explicar por qué las esferas civiles transformaron la información difundida en los medios por percepciones de inseguridad. La respuesta estriba en que existen una serie de procesos que al compaginarse legitiman la acción gubernamental de prevención del delito y combate a la delincuencia, pero tal cuestión no se da en paralelo respecto a la paz pública.

Es por ello que el presente trabajo no explica la relación disímbola entre rectoría del Estado y reconstrucción del tejido social para la paz pública. Algunos estudios aluden a la gobernanza de la seguridad pública como fundamento central de las políticas públicas ya que sin el respaldo y la corresponsabilidad de la sociedad civil la clase gobernante pierde legitimidad y con ello la posibilidad de reconstruir la seguridad pública.

Resulta paradójico que el Estado pretenda reconstruir la paz pública en un contexto en el que la seguridad es cada vez más privada y la inseguridad es percibida de un modo más público. También llama la atención que los medios impresos se hayan dedicado fehacientemente a difundir información relativa a la ineficiencia del Estado, principalmente del gobierno de Felipe Calderón mientras que soslayaron la corresponsabilidad, participación y diseminación de la paz civil.

Es decir, si la percepción de inseguridad se intensificó no sólo es por la opacidad y corrupción

del Estado, sino además los medios de comunicación dejaron de cuestionar a la ciudadanía por la pérdida de sus valores mientras delegaba en sus autoridades los instrumentos para la construcción de un sistema sociopolítico que les permitiera recuperar las condiciones mínimas de convivencia.

En efecto, los medios de comunicación en su afán de incidir en la agenda pública, sesgaron su difusión y responsabilizaron al Estado por el deterioro de las relaciones públicas, a cambio el Estado replanteó su función rectora por una mediadora cuyo resultado fue la auto-organización de las esferas civiles y con ello el contraste de dos visiones sobre un mismo problema: seguridad pública. Es decir, cada uno de los tres actores segmentó sus márgenes de decisión y maniobra para responsabilizar a los demás por la pérdida de la paz pública, la espiral de violencia y el restablecimiento de la rectoría del Estado.

Precisamente, es menester analizar los discursos de los tres actores; gobernantes, ciudadanos y comunicadores para reconstruir el escenario en el que la paz pública se transformó en imágenes y discursos relativos al narcotráfico, delincuencia organizada o violencia. Para tal propósito es menester trabajar con tipos ideales representativos de las esferas civiles, políticas y mediáticas a fin de descifrar la construcción de la agenda mediática, ciudadana, política y pública. Una vez descifrados los temas de las agendas será indispensable reconstruir el accionar de cada uno de los tres actores para poder explicar sus desencuentros. Acto seguido, será importante discutir el futuro de las relaciones entre Estado, ciudadanía y medios de comunicación en escenarios exacerbados de seguridad en la que las tecnologías de espionaje serán otro factor central a considerar en la reconstrucción de la paz civil o el incremento de la percepción de inseguridad.

Por último, el presente estudio puede ser promotor de la legalidad, socialización política y difusión de valores cívicos que permitan construir un sistema democrático en el que las futuras generaciones adopten términos tales como corresponsabilidad, auto-eficacia, participación, dialógica y debate en sus discursos. Una vez incorporados los símbolos y significados de la paz pública, las acciones para hacer posible tales discursos estarán más cercanas a estas generaciones de legitimidad sociopolítica.

Referencias

Álvarez, D., Núñez, J., Álvarez, L., Dobarro, A., Rodríguez, C., & González, P. (2011). Violencia a través de las tecnologías de la información y la comunicación en estudiantes de secundaria. *Anales de Psicología*, 27, 221-231

Araujo, X. (2012). Una revisión básica sobre conceptos y teorías de gobernabilidad. *Geoenseñanza*, 9, 203-212

Badejo, A. & Oluyemi, S. (2012). Predisposing factors to youth involvement in electoral violence in Lagos metropolis. *Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policing Studies*, 3, 312-316

Belli, S. (2010). La construcción de una emoción y su relación con el lenguaje: revisión y discusión de un área importante de las ciencias sociales. *Theoria*, 18, 15-42

Bizer, G., Larsen, J. & Petty, R. (2010). Exploring the valence framing effect: negative framing enhances attitude strength. *Political psychology*, 32, 59-80

Bolivar, C., Contreras, J. Jiménez, M. & Chau, E. (2010). Desentendimiento moral y dinámicas del robo escolar. *Revista de Criminología*, 52, 243-261

- Bourdieu, P. (2011). Las estrategias de reproducción social. México: Siglo XXI
- Brodie, G., Beck, J. & Carr, A. (2011). Goals feedback and self regulation: control theory as a natural framework for executive coaching. *Consulting Psychology Journal*. 63, 23-38
- Buker, H. (2011). Formation of self control: Gottfredson and Hirschi's general theory of crime and beyond. *Aggression and Violence Behavior*. 16, 265-276
- Castillo, J., Esparza, J., Argueta, F., Marqués, A. & Velázquez, A. (2010). Análisis de la opinión pública en la imagen proyectada en medios impresos por candidatos a diputados *Razón y Palabra*, 73, 1-27
- Dammert, L., Salazar, F., Montt, C. & González, P. (2010). *Crimen e inseguridad. Indicadores para las Américas*. Santiago: Flacso-Bid
- Díaz, C. (2013). Nueva gestión pública y gobernanza: desafíos en su implementación. *International Journal of Conscience*, 8, 177-194
- Escobar, M. (2012). La participación ciudadana, análisis a partir de la transición democrática. *Revista Internacional de Investigación en Ciencias Sociales*, 8, 119-140
- Fabricant, L. & Postero, N. (2013). Contested bodies, contested states: performance, emotions, and new forms of regional governance in Santa Cruz, Bolivia. *Journal latin American and Caribbean Anthropology*, 18, 187-211
- Fazio, R. H. (2011). A fundamental conceptual distinction...Gone unnoticed. In R. M. Arkin (Ed.), *Most underappreciated: 50 prominent social psychologists describe their most unloved work* (pp. 72-76). New York: Oxford University Press.
- Fernández, C., Revilla, J. & Domínguez, R. (2010). Emotions elicited by television violence. *Scientific Journal of Media Literary*. 36, 97-104
- García, C. (2011). Una aproximación sistémica a la realidad política. *Enfoques*, 23, 63-78
- García, C. (2012a). Estructura perceptiva de inseguridad en universitarios. *Liberabit*, 17, 1-10
- García, C. (2012b). Sistemas de complejidad política. *Trabajo Social Hoy*, 14, 39-48
- García, C. (2013a). La cobertura de la prensa en torno a la inseguridad migratoria durante elecciones presidenciales. *SEECI*, 16, 57-63
- García, C. (2013b). La inseguridad migratoria en los medios impresos de la Ciudad de México. *Reflexiones*, 452, 159-173
- Gervais, W. (2011). Findings the faithless: perceived atheist prevalence reduces anti-atheist prejudice. *Personality and Social Psychology Bulletin*. 37, 543-556
- Giddens, A. (2011). *La constitución de la sociedad. Bases para la Teoría de la Reestructuración*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- Iglesias, A. (2010). La planificación estratégica como instrumento de gestión pública en el gobierno local: análisis de caso. *Cuadernos de Gestión*, 10, 101-120
- Innerarity, D. (2012). La gobernanza global, de la soberanía a la responsabilidad. *Revista Cidob*, 100, 11-23

Laca, A., Santana, H., Ochoa, Y. & Mejia, J. (2011). Percepción de bienestar social, anomia, interés e impotencia política en relación con las actitudes hacia la democracia. *Liberabit*, 17, 7-18

Leaf Van Boven, M. & Campbell, T. (2010). Stigmatizing materialism: on stereotypes and impressions of materialistic and experiential pursuits. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 36, 551-556

Maisley, N. (2013) ¿Oportunidad u obstáculo? El incipiente derecho a la participación pública en asuntos ambientales globales, a la luz de la Teoría de la Democracia Cosmopolita. *Revista de Derecho Ambiental de la Universidad de Palermo*, 11, 113-150

Marina, N. (2010). Representaciones sociales acerca de la delincuencia que tienen las menores de edad institucionalizadas en un centro de reeducación de la ciudad de Bogotá. *Diversitas Perspectivas en Psicología*, 6, 275-295

Orgaz, L., Molina, L. & Carrasco, C. (2011). El creciente peso de las economías emergentes en la economía y gobernanza mundiales. Los países BRIC. *Documentos Ocasionales*, 1101, 1-24

Osakpa, D. (2012). Political violence and secondary school education in Nigeria: a case study of bette-bendi people of cross river state. *International Journal of Research in Engineering and Social Sciences*, 2, 189-206

Rodríguez, P. (2010). Gobernanza multinivel y política regional europea. *Revista de Estudios Regionales*, 88, 199-222

Rosas, F., Calderón, J. & Campos, H. (2012). Elementos conceptuales para el análisis de la gobernanza territorial. *Quivera*, 14, 113-136

Ruíz, J. (2010). Eficacia colectiva, cultura ciudadana y victimización: un análisis exploratorio con sus relaciones con diversas medidas de miedo al crimen. *Acta Colombiana de Psicología*, 13, 103-114

Sampedro, V. & Resina, J. (2010). Opinión pública y democracia deliberativa. Una actualización en el contexto digital de la sociedad red. *Punto e Vargula*, 8, 1-22

Sen, A. (2011). *The idea of justice*. Cambridge: Harvard University Press